

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001 31 05 017 2016 00469 01 promovido por MARIA OFIR MONCADA DE CORREDOR y TITO AURELIO CORREDOR GONZÁLEZ contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a resolver el recurso de apelación presentando por la parte demandante, frente a la sentencia absolutoria emitida el 12 de diciembre de 2016 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín.

La decisión se adopta de forma escrita, de conformidad a las previsiones del decreto legislativo 806 de 2020, la cual fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala mediante providencia número **087 de 2021**.

ANTECEDENTES

María Ofir Moncada de Corredor y Tito Aurelio Corredor González, demandaron a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, en adelante Colfondos S.A., para que se le condene al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de manera compartida, a partir del 12 de abril de 2010 con las mesadas comunes y especiales indexadas, intereses moratorios del art 141 de la Ley 100 de 1993 y costas; teniendo como causa la prestación pretendida, el fallecimiento de su hijo Robinson Ferney Corredor Moncada.

Como fundamento de sus pretensiones expusieron que contrajeron matrimonio el 2 de mayo de 1981, procreando los siguientes hijos: Robinson Ferney, Michael Steven, Yeny Yuliet, Sindy Dayana y Angie Lizet. El primero era el mayor, inició su actividad laboral como auxiliar de enfermería el 6 de diciembre de 2002, y dependían económicamente del producto de su trabajo para los gastos del grupo familiar como alimentos, servicios públicos, impuestos, educación de las hermanas.

Indican que Robinson Ferney mejoró la calidad de vida de su núcleo familiar, al incrementar la ayuda económica para trasladar la residencia ubicada en estrado 2 del Municipio de Bello Antioquia, diagonal a la penitenciaría de Bellavista, a estrato 3 en el barrio Belén de Medellín, donde fue su última residencia. Falleció el 12 de abril de 2010 después de 4 meses y medio de hospitalización por cáncer de piel.

El 27 de enero de 2011 solicitaron la pensión de sobrevivientes, por depender económicamente del causante en la suma mensual de \$750.000, fuera de otras ayudas monetarias extraordinarias, la cual les fue negada en comunicación No. BP-R-IL-09067-08-11 por no existir dependencia económica respecto a su hijo fallecido, y se devolvió el dinero acreditado en la cuenta de ahorro individual del causante más los rendimientos financieros, en un 50% para cada uno. Señalan

que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes por haber dependido de su hijo fallecido, según lo prescrito por la sentencia C-111 de 2006.

La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa, buena fe, prescripción, compensación¹.

En auto del 16 de agosto de 2016² se admitió el llamamiento en garantía realizado por Colfondos S.A. frente a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., quién se opuso a la demanda principal y al llamamiento³ y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, compensación, improcedencia de sanciones moratorias, improcedencia de acumulación de indexación e interés moratorio, prescripción, ausencia de cobertura de la paliza, límite asegurado, improcedencia de intereses moratorios a cargo del asegurador, improcedencia de condena en costas a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.

En **sentencia del 12 de diciembre de 2016**, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la demandada y a la llamada en garantía de todas las pretensiones. Condenó en costas a los accionantes fijando agencias en \$689.454.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con dicha decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación indicando estar claro que han manipulado la información consignada en el formato de la investigación administrativa adelantada por Mapfre Colombia, pues en el folio 202 se alude a una asignación de retiro de la Policía Nacional por \$2.400.000 desde 1982 cuando la misma era de \$17.000. Dice haber solicitado

¹ Fl. 143-158

² Fl.173

³ Fl.182-197

que se oficiará a CASU para determinar el valor de la asignación de retiro y se queja de no haberse decretado dicha prueba en gracia al debido proceso y a los intereses de la parte demandante.

Afirma que el oficio del 19 de agosto de 2011 niega la pensión de sobrevivientes porque en la investigación administrativa se aduce que el demandante Tito recibe una asignación de retiro por \$2.400.000 desde el año 1982, una renta de apartamentos ubicados en un inmueble de su propiedad del municipio de Bello Antioquia, más una renta de un establecimiento de comercio frente a la cárcel Bellavista, pero que no se probó por parte de las demandas realmente cuál era el ingreso, si estos establecimientos de comercio rendían una cuantía especial para efectos de decir que no tenían necesidad posterior a la muerte del causante.

Agrega que es un establecimiento de comercio que no tiene ninguna relevancia comercial de importancia. Que la casa donde han levantado uno o dos pisos de un estrato dos no es una propiedad cuantiosa, y la aseguradora que hace la investigación administrativa lo reconoce a folio 203, donde aparece que recibe \$300.000 de una casa en Bello en un barrio peligroso. Asegura que el causante mantenía ingresos superiores a \$1.300.000, \$1.600.000, \$1.800.000, dependiendo de la intensidad nocturna que laboraba y suministraba una ayuda mensual de \$750.000, así quedó suscrito en el folio 203 por parte de la investigadora de Mapfre.

En cuanto al testigo Eliseo dice que por lo regular siempre ocurre los comentarios, no es de oídas, sino una situación que quedó plasmada en el formato a folio 203. Insiste en que se probó \$750.000, que el causante vivía en la casa y esa era una ayuda importante, trabajó y cotizó 7 años en Colfondos.

Dice que la investigación faltó a la verdad y que el proceso se quedó cortó de prueba. Solicita se decrete la prueba que no consideró la juez frente al valor de la asignación del demandante en 1982, pues Mapfre dice que son \$2.400.000, por lo

que solicita se examine la decisión, se revoque la sentencia y se concedan las pretensiones.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. presentó alegatos de conclusión, solicitando se confirme la sentencia al no existir dependencia económica de los demandantes respecto de su hijo fallecido.

Así mismo, la parte demandante presentó alegatos de conclusión frente a lo cual se advierte lo siguiente:

En el proceso de la referencia se corrió traslado para alegar mediante auto notificado por estados número 48 del 18 de marzo de 2021. En dicho auto se concedió a cada una de las partes el término de cinco (5) días para presentar alegatos de forma escrita, iniciando con la parte demandante quien es el apelante en este caso, **término que le corrió del 19 de marzo al 26 de marzo de 2021⁴**.

El 7 de mayo de 2021 el apoderado de la parte demandante remitió correo electrónico a la Secretaría de la Sala Laboral de este Tribunal, adjuntando memorial de esa fecha donde solicita intervención:

“de que no aparece registrado en el sistema (no se ve en la pantalla de consulta de procesos la presentación de los ALEGATOS DE CONCLUSIÓN que le remití electrónicamente el día 3 de abril de 2021, con las respectivas EXCUSAS MÉDICAS, TRATAMIENTOS, HOSPITALIZACIÓN Y SECUELAS AL DETERMINÁRSEME PACIENTE CONVALECIENTE DE CORONAVIRUS SARS-COV2-COVID-19, con resultado POSITIVO, por lo cual quede incapacitado a partir del 18 de febrero de 2021 hasta el 25 de marzo de 2021”.

⁴ 22 de marzo fue lunes festivo

Adjunta también el memorial de alegatos mencionado y constancia de remisión del correo del sábado 3 de abril de 2021 a las 15:20.

Frente al correo del 3 de abril de 2021 mencionado por el memorialista, la secretaria de este Tribunal indicó en correo del 10 de mayo de 2021 lo siguiente:

“EN ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL DESPACHO EN RELACIÓN CON EL MEMORIAL DE LA REFERENCIA, LE INFORMO QUE NO FUE REGISTRADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL, YA QUE EL 3 DE ABRIL DE 2021 FUE SÁBADO SANTO, FECHA EN LA CUAL LA SALA LABORAL DEL TSM SE ENCONTRABA EN VACANCIA JUDICIAL Y LOS CORREOS INSTITUCIONALES DE ESTA DEPENDENCIA SE ENCONTRABAN BLOQUEADOS PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS ENVIARAN MEMORIALES EN TIEMPO NO HÁBIL, POR TANTO, DICHO MEMORIAL NO FUE RECIBIDO.”

Conforme a los documentos aportados con el memorial de alegatos, se advierte lo siguiente frente a la situación médica del apoderado de la parte demandante, Dr. Jaime Augusto Rico Lezama:

Fecha	Documento	Pagina
18/02/2021	Prueba positiva Covid-19	8
24/02/2021	Epicrisis de la Dirección de Sanidad, donde consta hospitalización del 19 al 24 de febrero de 2021 por diagnóstico “NEUMONIA VIRAL GRAVE POR SARS COV 2”	22
24/02/2021	Certificado de la Dirección de Sanidad donde se indica: “Motivo Certificado PACIENTE EN FASE CONVALECIENTE DE COVID19, DEBE CONTINUAR DESCANSO, AISLAMIENTO PREVENTIVO POR 10 DÍAS MÁS. APARTIR DE LA FECHA 24/02/2021 DE EGRESO” Lo anterior implica que la convalecencia iba hasta el 7/03/2021	9
8/03/2021	Certificado del odontólogo Jaime Pacheco donde indica que el Dr. Jaime Augusto Rico Lezama asistió a cita de urgencias con DX Candidiasis bucal, “Por tal motivo incapacitado 14 días a partir de hoy hasta el 21 de marzo”	10
23/03/2021	Cita de revisión odontológica “donde se observa muy buena recuperación, pero (...) se procede a extracción de coronas (...) se continua con antibioticoterapia amoxicilina hasta el 25 de marzo”. Remitió al internista para evaluación y no se prescribió incapacidad.	11

De lo anterior se observa que, entre el lapso del traslado (19 al 26 de marzo de 2021) estuvo incapacitado el viernes 19, sábado 20 y domingo 21, existiendo solo un día hábil en el cual se suspende el término del traslado, lo que implica que le feneció el 5 de abril de 2021. Por lo que al haberse remito los alegatos de conclusión el 7 de mayo de 2021 se encuentran extemporáneos.

Se aclara que las alegaciones remitidas a la Secretaría de este Tribunal en correo del sábado 3 de abril de 2021 no fueron recibidas, dado que en la vacancia judicial los correos institucionales de esta dependencia se encontraban bloqueados.

Dado lo anterior, no se tendrán en cuenta los alegatos de conclusión remitidos en correo del 7 de mayo de 2021 por la parte demandante, empero ello no es óbice para el estudio del recurso de apelación debidamente interpuesto y sustentado en audiencia.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar, si a los demandantes le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, conforme al literal d. del artículo 47 de la Ley 797 de 2003, en calidad de padres del causante; a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y costas.

CONSIDERACIONES

Preliminarmente se hace menester precisar, que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido que por regla general y salvo ciertas excepciones, el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es el vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, considerando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no consagró un régimen de transición en relación con la misma.

Se probó en el expediente, que ROBINSON FERNEY CORREDOR MONCADA falleció el 12 de abril de 2010⁵, estando afiliado al sistema general de pensiones en Colfondos S.A., por lo que las normas aplicables son los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, advirtiéndose que el requisito de semanas no está en discusión según la respuesta a la demanda y el comunicado BP-R-I-L-09067-08-11 del 9 de agosto de 2011, que negó la pensión de sobrevivientes a los demandantes.

La calidad de beneficiarios invocada por los demandantes está regulada en el artículo 47 literal D) de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, que exige para la causación del derecho, la dependencia económica de los padres respecto del causante, para el momento del deceso.

Se demostró con la documental glosada en folio 17, la filiación del causante ROBINSON FERNEY CORREDOR MONCADA respecto a sus padres aquí demandantes.

Es importante precisar que la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, y la H. Corte Constitucional⁶, han definido el alcance de la dependencia económica como el estado de necesidad que se predica de quien depende económicamente, frente a la persona que asume la obligación de su sustento. Y han precisado además, que tal situación no tiene que ser total y absoluta, porque en el contexto de un Estado Social de Derecho no puede

⁵ Fl.15

⁶ Mediante sentencia C-111 de 2006

exigirse la configuración de estados de indigencia, pero, si debe existir una relación de necesidad entre el aporte y la vida digna del beneficiario, de modo que en el contexto jurisdiccional, el análisis debe enfocarse en que sin la ayuda del benefactor, la persona frente a quien se predica la dependencia económica entraría en un estado de afectación considerable de sus derechos fundamentales, por consiguiente, al faltar la ayuda del afiliado, la economía del peticionario se vería menoscabada.

La H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su línea jurisprudencial⁷, precisó las siguientes sub reglas aplicables, en el estudio de éstos asuntos:

- La dependencia económica debe definirse en cada caso particular y concreto, según el análisis conjunto de la prueba legalmente decretada y practicada.
- Para concluir la dependencia, es menester que se demuestre subordinación económica relevante, esencial y preponderante del beneficiario frente al causante para el momento del fallecimiento, de modo que, al faltar el ingreso se afecte el mínimo sostenimiento de la familia.

En este caso fueron enfáticas la entidad demandada y la llamada en garantía, al indicar que los demandantes no acreditaron que, para el momento de la muerte del causante, dependiera económica de este, razón por la cual procederá la Sala con el análisis de la prueba obrante en el proceso para determinar si tal supuesto fue demostrado.

Se indicó en la demanda⁸ que los demandantes percibían mensualmente del causante la suma de \$750.000, fuera de otras ayudas monetarias extraordinarias, y

⁷ La cual se abandera por la sentencia hito, radicación N° 35.156 del 9/06/2010, ratificada en las sentencias 35.991, 37.595 y 42.792 de 2011; SL 9640 y SL 8928 de 2014; SL 8406 de 2015, SL 11871 y SL 10256 de 2017, SL 3514-2018, SL1243-2019 y SL1218-2021 entre otras.

⁸ Hecho trigésimo 6° fl.2

que dependían económicamente de este para los gastos del grupo familiar como alimentos, servicios públicos, impuestos, educación de las hermanas.

Los documentos de folios 198 a 211 contienen los formatos de “CUESTIONARIO PARA RECLAMANTES DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES” formulados a los accionantes, los cuales constituyen elementos integrantes de la investigación administrativa adelantada por Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. para establecer si ellos tenían la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en relación con el fallecido. Allí indicaron que al momento del fallecimiento del causante este vivía con:

1. Tito Aurelio Corredor (padre)
2. Maria Ofir Moncada (madre)
3. Yeny Yulieth Corredor Moncada (hermana)
4. Michael Stiven Corredor Moncada (hermano)
5. Cindy Dayana Corredor Moncada (hermana)
6. Angie Lizath Corredor Moncada (herma)
7. Manuela Toro Corredor (sobrina)

La información de gastos e ingresos familiares registrada por los actores en el citado formulario, que ambos reconocen haber firmado en sus interrogatorios de parte y que no fue tachado de falso en momento alguno, es la siguiente:

INGRESOS DEL CAUSANTE Y APOORTE AL HOGAR		GASTOS MENSUALES GRUPO FAMILIAR		APOORTES DE OTRAS PERSONAS AL HOGAR		GASTOS FAMILIARES DESPUES DEL DECESO DEL CAUSANTE	
Salario	1.300.000	Telmex	108.000	Yeny Juliert Corredor(hijo de los dtes)	220.000	Arriendo	500.000
Aporte	750.000	Arriendo	480.000	Michael Stiven Corredor(hijo de los dtes)	220.000	Agua	16.378
		Agua	15.000	Tito Aurelio Corredor (dte)	1.443.000	Luz	88.648
		Luz	70.000	Otro ingresos de Tito por arrendamiento casa en Bello	300.000	Gas	10.892
		Gas	10.000			Teléfono	12.500
		Teléfono	20.000			Medicinas	55.000
		Medicinas (pagos EPS afiliado y reclamante	105.000			Vestuario	50.000
		Vestuario	100.000			Mercado	400.000
		Mercado	600.000			Prestamos	500.000
		Prestamo (credito bancario reclamante y electrodoméstico afiliado)	600.000			Transporte	150.000
		Transporte (trabajo, afiliado, clinica)	300.000			Matriculas	135.000
		Parqueadero moto afiliado	25.000			Otros	35.000
		Celular	200.000				
TOTAL	750.000		2.633.000		2.183.000		1.953.418

De lo anterior se advierte que entre los gastos mensuales del grupo familiar se incluyen gastos propios del fallecido como préstamo, transporte, parqueadero de moto. Evidenciándose que los \$750.000 que supuestamente aportaba también se utilizaban para cubrir sus propios gastos, por lo que en realidad el aporte al grupo familiar era menor. Se advierte también que el aporte de otras personas al hogar, en vida del causante, era de \$2.183.000, suma que supera los gastos del grupo familiar después del deceso del causante, los cuales disminuyeron a \$1.953.418.

En el interrogatorio de parte indicó el señor Tito Aurelio Corredor que el salario del causante “variaba, unas veces le aparecían buenas quincenas \$1.300.000, \$1.600.000 así mensualmente, más o menos”, y la señora Maria Ofir Moncada de Corredor afirmó que “era por ahí fijos \$1.300.000 o \$1.400.000, pero como hacía muchos turnos se le subía a \$1.600.000 por los recargos”. Sin embargo, dicho salario no fue probado, resaltándose además que el causante “los últimos 4 meses no trabajó porque se la pasó hospitalizado” según indicó el señor Tito y lo confirmó su cónyuge, por lo que solo recibía el valor de las incapacidades, que tampoco fueron probadas, y la señora Ofir ni siquiera recuerda quién las recibía.

Indicó también el señor Tito Aurelio Corredor, que para el 2010 los gastos de su casa eran como \$500.000 de arriendo, \$500.000 de mercado, \$400.000 más o menos de los estudios de sus hijos en pasajes, \$200.000 más o menos de servicios públicos. A la pregunta, para el momento del deceso del causante quiénes le colaboraba y cuál era el valor aportado indicó “me aportaba mi hijo \$700.000 de su trabajo, mi hija aportaba una parte y mi hijo que también trabajaba como enfermero el menor también nos colaboraba para la casa, entonces hemos sido una familia muy unida, nos colaboramos mutuamente uno del otro”. Curiosamente solo dijo el valor del aporte del causante y ante la reiteración de la pregunta cuál era el aporte de los otros hijos indicó “recuerdo el de mi hijo que nos daba \$700.000, el de la hija daba otro tanto y yo otro tanto, pero cifras precisas, si de pronto mirando el expediente lo que dijimos en esa época o no pero exactamente todos aportaban y todos ayudaban y todos nos hemos colaborado, pero mi hija si aportaba más de \$300.000 y mi otro hijo también y yo también aportaba”.

Así mismo, a la señora Ofir se le preguntó si sus otros dos hijos aportaban económicamente en vida de Robinson y respondió “Robinson era el que aportaba, mi hija Yeny estaba estudiando, ella trabajaba y estaba en la universidad, que ellos directamente nos aportaran, daban así alguna cosita, pero que dijera que aportaban no”. Se le puso de presente el cuestionario que firmó⁹ y se le dijo “ahí dice que sus otros dos hijos aportaban económicamente y usted dice que no, que apenas medio daban cualquier cosa”, se le requirió para que indicara si aportaban o no y guardó silencio. Se le reiteró la pregunta si “al momento del deceso de Robinson sus otros hijos les colaboraban a ustedes y cuál era el valor aportado por cada uno” y respondió “no, es que no recuerdo, solo recuerdo de mi hijo que murió, pero no recuerdo bien de los otros, lo que Robinson aportaba lo gastaba en la alimentación, servicios”. Evidenciándose que ambos demandantes omitieron información y presentan serias contradicciones en sus versiones, pues mientras la señora Ofir niega la colaboración de los otros dos hijos, el señor Tito finalmente reconoció que estos aportaban más de \$220.000 cada uno que fue la suma registrada en el cuestionario, al indicar que realmente aportaban más de \$300.0000.

⁹ Fl.198-211

De otra parte, el señor Tito afirmó no haber vendido la casa de Bello, tiene el primer piso, “lo otro son unas piecitas ahí que habíamos hecho pero los primero y segundo que se había hecho eso sí vendió”. Dijo que para esa época tenía alquilada la propiedad de Bello como por \$300.000 a un matrimonio que llevó a un invidente y duro mucho, le quedaron debiendo como más de \$3.000.000. Además, se le preguntó si para abril de 2010 le tenía arrendada la casa al señor dragoniante del Impec Anderson San Juan y dijo “sí, duró un mesesito ahí, dos meses y se fue, ahí fue cuando llegaron, sí, duro un mes porque lo trasladaron” este le pagaba \$300.000. A la pregunta si le tuvo arrendado otro inmueble a una señora Luz Stella Sinvaqueba que trabajaba en confecciones dijo “sí le arrendé a ellos sí, el primer piso, y entonces pues, la misma cosa, eso ya se querían quedar dueños de la casa y me tocó también poner abogado para sacarlos”. Lo anterior da cuenta de 3 inmuebles, esto es primero, segundo y tercer piso, y si bien quiso hacer ver que no percibía ingresos por arrendamientos, finalmente aceptó que “alguna cosita si he recibido”.

De lo dicho se advierte que mínimamente eran dos inmuebles los que tenía arrendados el señor Tito Aurelio Corredor González, y así lo confirmó su cónyuge María Ofir Moncada de Corredor, quien dijo que su esposo tiene una casa en Bello, es un primer piso. A la pregunta de si tiene construido segundo o tercer piso dijo “poquito a poco cuando vivíamos allá se había construido, pero no estaba muy bien terminado”. Dijo que el segundo y tercer piso ya no pertenece a su esposo y que “se vendieron el año pasado o este año”¹⁰. Aceptó que ese segundo y tercer piso estuvieron arrendados en vida Robinson y que el arriendo de esos 2 pisos “en ese entonces era como a \$200.000, \$250.000 por cada uno” y que ese dinero “lo recibía mi esposo o lo recibía yo”. Mientras que el señor Tito aludió a cánones de arrendamiento de \$300.0000 y trató de hacer ver que no recibía ingresos por arrendamiento porque supuestamente los inquilinos no le pagaban, incurriendo

¹⁰ Fecha de la diligencia en la que se practicó interrogatorio de parte 12 de diciembre de 2016

nuevamente los demandantes en serias contradicciones que desdibujan la supuesta dependencia económica alegada frente a su hijo fallecido.

Se le preguntó al señor Tito si ha tenido algún establecimiento de comercio y respondió “sí, al frente de la Cárcel de Bellavista tuve una chacita que se llamada la Tarde Gris. No recuerda hasta cuándo tuvo ese negocio pero indica que cuando murió su hijo lo tenía. Se le preguntó si además de eso tenía otro establecimiento denominado variedades Ofir y dijo “es que prácticamente así se llamaba ese negocio”. A la pregunta usted dice que se llamaba Tarde Gris dijo “le cambiamos, en el transcurso del tiempo le fuimos cambiando todo”, haciendo parecer que se trataba de un solo negocio, sin embargo, faltó a la verdad porque en el certificado de registro mercantil obrante a folio 212, el señor Tito Aureliano Corredor González aparece como propietario de los establecimientos de comercio:

1. Almacén Variedades Ofir, en Bello, cuya actividad comercial es venta de misceláneas.
2. Kiosko la Tarde Gris, en Bello, cuya actividad comercial es venta de gaseosas, comestibles, mekatos.

La existencia de ambos negocios la confirmó la señora Ofir, quien a la pregunta de, si su esposo fue propietario de un establecimiento de comercio llamado almacenes variedades Ofir dijo “ahí mismo en la casa teníamos un negocito”, no recuerda la dirección de la casa en Bello y dice que quien trabajaba en ese almacencito era “yo, como estaba ahí mismo en la casa”, dice no recordar cuánto recibía mensualmente por el almacén. Del establecimiento de comercio Kiosko la Tarde Gris dijo que su esposo lo puso con un señor Tayro Osorio, eran como socios, no recuerda si su esposo en algún momento lo trabajó. Pero a la pregunta realizada al señor Tito de cuántos eran los ingresos que recibía por ese establecimiento de comercio dijo “no pues, eso era muy poquito porque con lo que se hacía en el día al otro día se surtía (...) tenía al menos con que almorzar con lo que quedaba”, se le preguntó reiteradamente cuánto era más o menos lo que le

quedaba y dijo “por ahí unos \$100.000 más o menos”, se le preguntó si trabajaba todo un mes por \$100.000 indicando “yo era jubilado, o sea, mi asignación de retiro con eso me sostenía”.

Aparte de las contradicciones anteriores, encuentra esta Sala que el señor Tito aseguró que el fallecido tenía una moto que no había pagado, indicando “cuando él falleció se la dimos en pago a una señora que se la debía casi toda, entonces murió y le entregamos la moto a esa señora”, lo cual no coincide con lo dicho por su cónyuge quien afirmó que su hijo tenía una moto que cree que ya la tenía paga, “con esa moto se quedó una compañera de trabajo”. A la pregunta si esta se la compró dijo “si ella, eran muy buenos amigos, ella le ayudó mucho cuando la enfermedad y entonces a la fina se le vendió a ella”. En lo que sí coinciden es en la deuda que tenía el fallecido por compra de electrodomésticos, la que aparece incluida en los gastos del hogar en el cuestionario que ellos firmaron y que denota que los supuestos \$750.000 con que colaboraba el causante se empleaban en parte para pagar sus propios gastos.

Respecto a la propiedad ubicada en la calle 52 No. 49-61 Edificio Vélez Ángel oficina 201, indicó el señor Tito que es de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional, que ese inmueble no es suyo “la compré porque dirijo esa entidad, pero las escrituras están a nombre de la asociación de jubilados de la Policía, yo la compré en un remate, ahí funciona la asociación de jubilados de la Policía en Antioquia y está a nombre de la asociación”. Sin embargo, según comunicado 01N2016EE008944 de la Oficina Principal de Registro de Instrumentos Públicos Medellín-Norte¹¹, dicho inmueble aparece a nombre del señor Tito Aureliano Corredor González. Dice que no recibe renta por ese bien porque no es de él, “es de los asociados de la Policía Nacional, esos son aportes de ellos y yo no hago sino administrar eso nada más”, pero a la pregunta si por esa administración le dan algo dijo “si me dan alguna cosita por ahí voluntariamente cada mes, ahorita en este momento, pero eso no

¹¹ Fl.224

ha sido toda la vida”, omitió informar el valor del ingreso percibido por tal concepto.

Lo hasta acá analizado no permite vislumbrar la dependencia económica alegada por los demandantes respecto de su hijo fallecido, la cual tampoco logra probar el único testimonio rendido en el proceso por el señor ELISEO OROZCO HENAO, quien si bien es cierto conoce al demandante Tito hace 18 o 20 años porque fueron compañeros de trabajo y en ese entonces pertenecían a una asociación de policías retirados cerquita de Zenu, y en declaración extrajuicio del 18 de marzo de 2016¹² dijo que le constaba el aporte de \$750.000 mensuales que daba el fallecido a su núcleo familiar, también lo es que en la declaración rendida en este proceso, a la pregunta qué aporte económico hacia Robinson a la familia dijo “me habían comentado don Tito que el hijo le colaboraba con \$700.000, \$750.000 mensuales”. A la pregunta si sabe si efectivamente Robinson entregaba a su padre esa suma dijo “Yo no llegué a ver, pero don Tito si me contaba que el hijo le colaboraba con esa plata”.

Dicho señor solo ha visitado el hogar de los demandantes en 3 oportunidades, dejando claro que entre 2008 y 2012 no lo visitó. No sabe cuál era el salario del causante, dice que al momento del fallecimiento vivía con sus padres y los otros hijos que eran menores y estudiaban, no sabe los nombres. Reitera que sabe del aporte que daba el fallecido por lo que le contaba Tito. No sabe cuáles eran los gastos mensuales del grupo familiar del fallecido. No sabe si el causante tenía deudas al fallecer, ni qué porcentaje destinada de su sueldo para él y sus gastos propios.

Dice que el causante no le manifestó cuánto aportaba para la casa, que se lo manifestaba don Tito, quien le informaba que había sido muy buen hijo, que había empezado a trabajar y que le colaboraba con una plata. Lo que lo convierte en testigo de oídas, esto es, el que relata hechos que no ha percibido por sus

¹² Fl. 29

propios sentidos y que sólo conoce por el dicho de otras personas, razón por la cual su declaración carece de eficacia probatoria.

Respecto a la declaración extrajuicio de la señora MARIA EVANGELINA RUA DE ARBELAEZ¹³, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia ha explicado que las declaraciones extrajuicio recibidas para fines no judiciales, como las practicadas ante Alcalde o Notario, pueden tomarse como documentos declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración, según el artículo 220 del Código General del Proceso, no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo solicite¹⁴. En este caso la ratificación fue solicitada por la llamada en garantía¹⁵, sin que dicha señora compareciera al proceso, no pudiéndose tener en cuenta su declaración notarial.

Frente a lo que indica el recurrente de la prueba que la A quo no le decretó, relativa a oficiar a la Caja de Sueldos de la Policía para determinar que el salario del señor Tito no era \$2.400.000 como se indicó en la investigación administrativa, se advierte que en el decreto de pruebas se negó “el oficio solicitado a la Caja de Sueldos al haberse arrimado las colillas de los salarios y la certificación de salarios del demandante de fl. 25-28 y con eso el despacho encuentra suplida la prueba, máxime que no fue atacada”, se le preguntó al apoderado de la parte demandante si tenía alguna objeción frente al decreto de pruebas, quien indicó “conforme con la decisión señora juez”. Y en los alegatos de conclusión dijo “con respecto de que se solicitó oficiar a CASU cuánto era la asignación de retiro para esa fecha, yo estoy de acuerdo con la posición de la señora juez en el sentido que es suficiente, toda vez que no ha sido atacada esta prueba, las certificaciones de pago, los desprendibles de pago donde se demuestra pues que, fuera de deducciones, para esa fecha el señor Tito que era el jefe de hogar, devengaba más o menos unos \$550.000”. Luego no

¹³ Fl.30

¹⁴ Sentencia de 29 de mayo de 2012, Radicado 37.517 y SL4190-2020, Radicación n.º 77776 del 19 de octubre de 2020

¹⁵ Fl.196

Por lo que no hay lugar al decreto de dicha prueba en esta instancia, la que por demás resulta innecesaria porque, como lo dijo la A quo, las colillas de pago en favor del señor Tito provenientes de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, obran a folio 25-28. Allí se evidencia que para abril de 2010 la asignación era de \$1.069.045, y si bien, luego de los descuentos el neto recibido era de \$555.474¹⁶, ello por sí solo no acredita la dependencia económica de él y su cónyuge frente al fallecido, pues no se probó cuál era el aporte real del causante al grupo familiar, y por el contrario, lo dicho por ambos demandantes denotan que el grupo familiar percibía mensualmente cánones de arrendamiento de mínimo 2 inmuebles, más ingresos por 2 establecimientos de comercio, más colaboración de 2 hijos distintos al causante de más de \$300.000 cada uno, más ingresos por la administración de los aportes de los asociados de la Policía Nacional que ejercida el señor Tito en el inmueble ubicado en el edificio Vélez Ángel oficina 201. Destacándose además que este indicó “yo era jubilado, o sea, mi asignación de retiro con eso me sostenía”, y cuando se le preguntó en vida de Robinson quién le daba a su esposa María Ofir la alimentación y el vestuario dijo “eso me ha correspondido a mí, comprarles las cosas a todos en la casa y las mías también y ya lo que colaboran ellos es ayudas para un hogar”. Evidenciándose que, en el hipotético caso que hubiese existido una ayuda por parte del causante hacia los demandantes, esta se dio como un buen hijo de familia que ya trabajaba y habitaba en la casa de aquellos.

El análisis precedente permite concluir a la Sala el acierto de la decisión de primera instancia en torno a la desestimación de las pretensiones de la demanda, pues con lo dicho por los demandante en su interrogatorio de parte no se puede acreditar los fundamentos fácticos de la demanda, en tanto la finalidad procesal de dicha prueba es provocar confesión, y de la diligencia del interrogatorio de parte, no puede extraerse válidamente alguna confesión que los favorezca a sí mismos, dado que por definición, la confesión debe versar sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la

¹⁶ Fl.25

parte contraria, tal y como lo ha indicado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia¹⁷.

Conforme a lo anterior, ha de indicarse que la prueba acá analizada, valorada a la luz del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual le concede al Juez del Trabajo la facultad de formar libremente su convencimiento, y le permite establecer su juicio sobre los hechos debatidos en el proceso con las pruebas que más lo convenzan atendiendo a los principios que orientan la crítica de la prueba, no permite concluir la existencia de la dependencia económica alegada por los demandante, pues no se acreditó la ayuda que el causante daba a sus padres, y en el hipotético caso que lo hubiera hecho esta se daba como la ayuda que debe dar un buen hijo de familia, empero ello no significa que existiera una dependencia económica respecto de sus padres.

Así lo ha puntualizado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la H. CJS, al indicar que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del *«buen hijo»*, no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica y, en esta eventualidad, no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley¹⁸. Al respecto en la sentencia SL1243-2019, se destacó:

“Así, la dependencia económica tiene como rasgo fundamental el hecho de que, una vez fallecido el causante y, por lo mismo, extinguida la relación de contribución económica hacia el presunto beneficiario, la solvencia de éste [sic] último se ve amenazada en importante nivel, de manera que pone en riesgo sus condiciones dignas de vida. Esto es, una persona es dependiente cuando no cuenta con grados suficientes de autonomía económica y su nivel de vida digna y decorosa está subordinada a los recursos provenientes del que fallece.”

Ahora, acepta esta Sala que la dependencia económica no debe ser total y absoluta, y que el mínimo de los causahabientes debe corresponder al cualitativo y no cuantitativo, empero la prueba analizada no lleva a la convicción de la

¹⁷ Sentencias SL816 del 19 de noviembre de 2013 y SL8002 del 18 de junio de 2014, entre otras.

¹⁸ sentencia CSJ SL, 29 oct. 2014, rad. 47676, reiterada en providencias CSJ SL, 5 oct. 2016, rad. 52951, CSJ SL3425-2018 y CSJ SL1243-2019

existencia de la dependencia económica exigida por la ley y la jurisprudencia, no cumpliéndose con la carga de demostrar los fundamentos facticos alegados, de conformidad con el artículo 167 del CGP, y las reglas generales de la carga de la prueba expresadas, entre otros, por el tratadista Rocha Alvira, quien indica:

- “a) Onus probandi, incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción;
- b) Reus, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa;
- c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si éste no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda”.

Y por el tratadista Hugo Rocco, en su tratado de Derecho Procesal Civil- Parte General, quien explica que:

“La carga de la prueba no apunta a que una parte deba probar más que la otra, sino al interés que cada una tenga, según su posición en la respectiva relación jurídica, en la demostración de los hechos a los cuales el ordenamiento objetivo reconoce los efectos jurídicos deseados. Por tanto, en la medida que ambas partes llegan al proceso en igualdad de condiciones, como personas libres unas de otras, la carga de la prueba impone compromisos distintos a cada una de ellas en la protección o defensa de sus intereses. Al demandante el deber de acreditar que su contraparte se ha obligado por la ley o por su voluntad a un determinado comportamiento que debe declararse o cumplirse (hecho constitutivo); al demandado la demostración del hecho modificadorio, extintivo o impeditivo del nacimiento de la obligación reclamada”.

No alcanzándose el mínimo probatorio en materia de reconocimiento de prestaciones a cargo del Sistema de Seguridad Social, frente al cual indicó la H. C.S.J. en sentencia SL1331-2021, Radicación n.º 67877 del 23 de marzo de 2021, lo siguiente:

“Por mínimo probatorio se entiende el nivel de convencimiento judicial, derivado de la valoración del conjunto de pruebas, que sirve para acreditar un hecho y tenerlo por cierto en un proceso judicial, para tomar una

decisión respecto de las pretensiones o de las excepciones debatidas en el trámite jurisdiccional.

Así las cosas, en asuntos relacionados con la solicitud del reconocimiento de prestaciones propias del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, como es el caso, se requerirá la observancia de un pruebas básicas o necesarias para acreditar la condición que se alega.

Esto, traído al caso en examen, implica que, para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, deberá demostrarse el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993, como regla de carga probatoria más allá del vínculo legal, y el juez concederá la pretensión cuando encuentre acreditada la satisfacción de dicho requisito sin que haya lugar a dudas razonables.”

Dadas las anteriores consideraciones, en este caso la Sala no encuentre acreditada la satisfacción del requisito de dependencia económica de los demandantes respecto del fallecido sin que haya lugar a dudas razonables, razón por la cual se CONFIRMARÁ íntegramente la sentencia.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan las agencias en derecho en favor de la parte demandada en la suma de \$ 908.526.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión que se revisa en apelación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan las agencias en derecho en favor de la parte demandada en la suma de \$908.526.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 113 de junio 30 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL

GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL

**SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-
ANTIOQUIA**

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

69596242719554ef754408dce30c0e5e3dfd0a713387c5d39a15454f096196df

Documento generado en 29/06/2021 03:35:56 PM